



LA IDEA A DESTACAR

**RAÚL
RODRÍGUEZ
CORTÉS**

Analista político



Indignante y desesperanzador que AMLO no se esforzara por cumplir la promesa de dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa y procurar justicia a sus familias”

Gran angular

RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

AMLO fracasó en justicia y seguridad

Indignante y desesperanzador es que AMLO haya puesto en juego todo su capital político en sacar adelante la reforma constitucional del Poder Judicial, sin esforzarse más por cumplir con la promesa de dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos y desaparecidos en Iguala y procurar justicia para ellos y sus familiares.

Ese debió haber sido un principalísimo asunto que resolver en su gobierno, la gran asignatura pendiente en materia de justicia. Pero la injusticia prevaleció con el encubrimiento del destino final de los cuerpos de los 43 jóvenes y de los autores intelectuales y materiales de su desaparición, la ejecución de otras seis personas (incluida una que fue encon-

trada desollada) y al menos 40 heridos, algunos con lesiones que los discapacitaron de por vida (Centro Pro de Derechos Humanos).

Durante los 24 años que han corrido desde que se cometió la que acaso sea la más grave violación de los derechos humanos jamás ocurrida en México, las investigaciones han estado a cargo de autoridades estatales y federales que construyeron la llamada “verdad histórica” que, de la mano con el hoy prófugo exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (actualmente escondido en Israel), Tomás Zerón Lucio, y el exprocurador general, Jesús Murillo Karam (detenido en agosto de 2022 y beneficiado con prisión domiciliaria desde abril pasado), sostenía que los normalistas fueron



incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan por narcos del cártel Guerrero Unidos, protegidos por policías municipales, porque los confundieron con sicarios de otro grupo delictivo.

Expertos independientes (GIEI) auspiciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desmontaron la “verdad” histórica y una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CVAJ), creada ya en el gobierno de AMLO (2019) y encabezada por el exsubsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, apuntó hacia otras probables responsabilidades hasta que, como don Quijote con la Iglesia, topó con el Ejército, que sí abrió expedientes, al igual que la Marina, pero que se ha negado a proceder contra mandos del vigésimo séptimo Batallón de Infantería con sede en Iguala, presumiblemente involucrados en este crimen sobre el que las diversas instancias investigadores han concluido que “estuvieron involucradas altas instancias del Estado”, en complicidad con grupos del crimen organizado.

AMLO siempre ha sido reacio a profundizar en la presunta responsa-

bilidad militar, presionado -al grado de descarrilar al propio Encinas y perder la interlocución con los padres de los 43- por el gran poder político que durante su gobierno dio a las fuerzas armadas, incluidas, por supuesto, sus tareas en la seguridad pública y la lucha contra la delincuencia.

Ahí están los otros dos temas en lo que queda a deber y mucho:

En inseguridad y violencia, a pesar de que argumente una tendencia revertida hacia la baja, las cifras de su sexenio son abrumadoras: 197 mil 816 homicidios dolosos, 49 mil 830 desaparecidos y al menos 398 mil desplazados (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana).

En cuanto al crecimiento sin precedente de la participación militar en la vida del país, la Guardia Nacional, creada para preservar la seguridad pública desde el ámbito civil, ha quedado ya, tras reforma constitucional de este fin de semana, bajo el mando y control de la Sedena. Es imposible negar una riesgosa militarización del país, a contrapelo de aquella promesa de campaña de regresar a sus cuarteles a los soldados. ●

rrodriguezangular@hotmail.com